

Reestructuración capitalista, dominio agroenergético y disputas territoriales en México, Uruguay y Brasil

Agustín Ávila Romero / Matías Carámbula Pareja
Adriano Rodrigues de Oliveira / León Enrique Ávila Romero
Miguel Ángel Pinkus Rendón

En el presente artículo se analizan las disputas territoriales en tres países de América Latina, las cuales tienen que ver fundamentalmente con un proceso de reestructuración capitalista en el campo, el debate de la cuestión agraria entre un sistema agroindustrial concentrador y excluyente, y los procesos de resistencia de los pueblos indígenas, campesinos y agricultores familiares. En primer término se analiza la problemática de México y las principales disputas en torno al territorio entre la introducción de transgénicos en Yucatán y la resistencia de los apicultores mayas, los procesos de resistencia contra proyectos hidroeléctricos y de minería en el sureste mexicano y la nueva acción de despojo que se configura con la creación de las zonas económicas especiales. Posteriormente analizamos la disputa en el departamento de Canelones, en Uruguay, entre la producción familiar y el creciente poder de la agroindustria, en el que la agricultura familiar se convierte en un territorio de soberanía y por lo tanto de construcción de sentidos alternativos de futuro. Finalmente analizamos el caso brasileño, a partir de realizar un comparativo entre dos programas dirigidos a la agricultura campesina, el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel, ubicando sus diferentes impactos y alcances como parte de la disputa territorial entre diferentes perspectivas de la cuestión agraria.

Palabras clave: reestructuración capitalista, disputas territoriales, agricultura familiar, resistencia campesina.

CAPITALIST RESTRUCTURING, DOMAIN AGRO-ENERGY
AND TERRITORIAL DISPUTES IN MEXICO, URUGUAY AND BRAZIL

In this article we analyze the territorial disputes that are taking place in three countries in Latin America, which are primarily concerned with a process of capitalist restructuring in the rural live, and in which first the debate on the agrarian question, between a hub and exclusive agroindustrial system, and the other processes of resistance of indigenous peoples, peasants and family farmers. In the first place the problems of Mexico and major disputes over territory between the introduction of transgenic resistance in Yucatan and Mayan

beekeepers, processes of resistance against mining and hydroelectric projects in southeastern Mexico are analyzed. Then we discuss the dispute in the department of Canelones in Uruguay, between family production and the growing power of agribusiness, in which family farming becomes a sovereign territory. Finally we analyze the Brazilian case where a comparison between two programs for peasant agriculture Programme Food Acquisition (PAA) and the National Program for Production and Use of Biodiesel is made, placing their different impacts and scope, as part of the dispute territorial between different perspectives of the agrarian question.

Key words: capitalist restructuring, territorial disputes, family farming, peasant resistance.

INTRODUCCIÓN

La crisis capitalista de la década de 1980 impuso a los gobiernos latinoamericanos la puesta en marcha del modelo económico neoliberal, que ha traído como consecuencia el empobrecimiento creciente de la población. La dinámica de desarrollo capitalista que subordina la agricultura a la industria ha creado en el entorno rural una relación desigual y explotadora entre el campo y la ciudad, en la que somos testigos de movimientos migratorios de población –que nos recuerda la acumulación originaria de la que nos hablaba Marx– donde miles de hombres y mujeres acuden a las grandes metrópolis a vender su fuerza de trabajo. Además, la diferencia entre los precios agrícolas y los manufacturados empobrece aún más las condiciones de vida tanto de comuneros, agricultores familiares y pequeños empresarios agrícolas.

En este contexto en nuestros países ubicamos regiones de muy alta productividad ligadas esencialmente a la exportación o a la agroindustria, pero donde las condiciones ambientales y laborales nos afirman la existencia de una dinámica devastadora de la vida. Existe por tanto una división territorial del trabajo que se ha formulado en nuestros países –desarrollo geográfico desigual le llama David Harvey (2014)– donde tenemos polos de desarrollo con un alto crecimiento manufacturero, una alta concentración espacial de población y múltiples vías de comunicación.

Por ello, podemos afirmar que la imposición del modelo neoliberal ha agravado la crisis agrícola y el empobrecimiento del entorno rural a cambio del beneficio de los consorcios internacionales y el capital financiero. Además, la división territorial del trabajo impuesta por el capital favorece una diferenciación espacial, donde regiones económicas ligadas fundamentalmente al comercio exterior tienen dinámicas de crecimiento más grandes que las que se mantienen como surtidoras de materias primas y expulsoras de fuerza de trabajo.

Esto se presenta en un contexto donde el modelo extractivista (Gudynas, 2009) como patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, se ha generalizado en América Latina y forma parte del proceso de acumulación por desposesión que viven nuestras naciones.

[Resaltamos que] el extractivismo no contempla solamente actividades típicamente consideradas como tales (minería e hidrocarburos) sino también los agronegocios o la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoprodutor, que desestructura y reorienta los territorios, destruye la biodiversidad y profundiza el acaparamiento de tierras (Svampa, 2012:17).

REESTRUCTURACIÓN CAPITALISTA

En este contexto de instrumentación del neoliberalismo mundial de la década de 1980, la situación agraria mundial se ha visto fuertemente afectada. En efecto, la crisis de la década de 1970 de los países industrializados se conjuga con un cambio en la estructura productiva mundial agropecuaria en esas mismas fechas.

El cultivo de algodón, que había comandado la competencia internacional desde la posguerra, es sustituido por la producción de cereales, granos forrajeros y oleaginosas; esto acorde con las necesidades de valorización del capital que modifica los patrones de alimentación para obtener un mayor rendimiento energético de la fuerza de trabajo y por tanto una mayor plusvalía. Así, hoy existe disponibilidad de alimentos, ya que tenemos grandes excedentes mundiales cerealeros, de carne y leche, pero como éstos son producidos con sumas de capital y no existe en los países en desarrollo el dinero de sus habitantes para comprarlos, quedan ahí esas grandes reservas.

La división internacional del trabajo agrícola responde claramente a la política de globalización en la cual, con el fin de salir de la crisis y recuperar la tasa de ganancia, el capital hace uso de la explotación y la dependencia de los países en desarrollo. La vieja división del trabajo agrícola que se visualiza en los países desarrollados en la industria y en el campo es sustituida por una nueva donde los primeros tienen un papel relevante dentro de la producción agrícola mundial.

En la etapa actual de transición del dominio energético y financiero de la producción agrícola, somos testigos de la incorporación de alimentos y materias primas en objetos de especulación (*commodities*) como estrategia de dominio y de altas ganancias de empresas agroalimentarias, energéticas y financieras anglosajonas (Rubio, 2014).

La producción agrícola se ha industrializado y financiarizado, con ello se torna en una rama estratégica para la hegemonía mundial que, de acuerdo con la nueva división internacional del trabajo, contribuye a la perpetuación de las relaciones de desigualdad entre los países y al aumento de la pobreza y el hambre en el mundo, en un momento donde existen las fuentes materiales para hacer frente a estas dos grandes problemáticas.

La agricultura mundial está enfrentando una serie de transformaciones estructurales, a raíz de la crisis capitalista y alimentaria. Dichas mudanzas ocurren como resultado de la destrucción de los antiguos procesos que imperaron durante el modelo neoliberal, pero también forman parte de los nuevos fenómenos que surgen con la reestructuración capitalista [...] La estructura productiva mundial que prevaleció durante el orden agroalimentario global se está transformando fundamentalmente debido a la expansión de los agrocombustibles (Rubio, 2014:228).

La demanda de energía —y no la de los alimentos— será la que fijará los precios de los productos agrícolas. Por tanto, la reestructuración capitalista del espacio rural es encabezada por las empresas petroleras, mineras y agroalimentarias que impulsan diversas actividades como la siembra de agrocombustibles, los transgénicos y la financiarización mediante las *commodities*.

En el siglo XXI somos testigos de cómo amplias regiones agrarias se suman a la reestructuración capitalista, con la incorporación de tierras a la producción de agrocombustibles y la producción energética, ya sea mediante fracturación hidráulica (*fracking*) o energías renovables, la minería a cielo abierto, la construcción de infraestructura, el turismo, entre otras actividades.

LA CENTRALIDAD DEL ANÁLISIS TERRITORIAL

Así, una vertiente importante del capital se enfoca a despojar a los pueblos de sus riquezas naturales debido a la reestructuración capitalista. Minas, recursos naturales, hídricos y bosques, así como los sistemas de conocimientos ancestrales asociados con el uso de bienes comunes están perdiendo el carácter de bienes colectivos que por siglos tuvieron para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada y, por lo mismo, en mercancía, lo que representa un nuevo colonialismo, más ambicioso que el sufrido por los pueblos originarios de América Latina durante los siglos XV y XVIII (Ávila, 2013).

Diversos conflictos socioambientales recorren América Latina como resistencias al usos de técnicas más peligrosas para la vida y el medio ambiente, como el *fracking*,

la minería a cielo abierto y los transgénicos; la puesta en marcha de proyectos de producción de energía como las presas hidroeléctricas y termoeléctricas; el desarrollo de numerosos megaproyectos de infraestructura para la circulación de materias primas, tales como gasoductos, carreteras y aeropuertos; la expropiación y mercantilización del conocimiento ancestral y la cultura tradicional; los problemas de la contaminación y la correlativa emergencia sanitaria que pesa sobre las poblaciones como consecuencia de las externalidades producidas por la extracción, producción, circulación, consumo y desecho de la riqueza social subsumida a los procesos de acumulación de capital (Composto y Navarro, 2014).

De ahí la renovada relevancia del territorio para el análisis de las luchas y las resistencias comunitarias puede comprenderse a partir de las dinámicas adoptadas por la acumulación del capital en su actual fase neoliberal, ya que el modelo económico dominante implica un proceso de desterritorialización y reterritorialización. El primer movimiento, posibilitado por la creciente financiarización del capital, es a su vez condición de posibilidad del segundo movimiento, la penetración del capital en nuevos territorios (Ávila, 2016).

Para David Harvey (2004), la producción del espacio y de la naturaleza se da a partir del trabajo humano, determinado en el mundo actual por el modo de producción capitalista. Así, el espacio es producto, medio y condición de la acumulación de capital. Para Henri Lefebvre (1991), el espacio es producido socialmente, por ello está definido por las relaciones de producción (ahora capitalistas) y las relaciones de reproducción (división social del trabajo) y representaciones simbólicas. Milton Santos (1990) lo complementa diciendo que el espacio es indisociable de su contenido, es decir, no es el mero paisaje donde la acción social “sucede”, sino producto de las relaciones sociales.

Para los autores de la geografía crítica latinoamericana como Porto Gonçalves, Bernardo Maçano Fernandes y Carlos Zambrano, el territorio por tanto “es producto de una disputa social, que implica que pueden haber varios tipos de territorios según los intereses y proyectos de los actores sociales, por lo que su construcción está en constante conflicto” (Rodríguez *et al.*, 2010:6).

Entendemos al territorio como una construcción social, mediada por relaciones de producción y reproducción, por tanto, por relaciones sociales de poder. El territorio implica una apropiación del espacio.

Así, el proceso de construcción del territorio recoge las relaciones culturales con el espacio, así como las formas de apropiación y explotación de ese espacio. El territorio es, entonces, la proyección del grupo social, de sus necesidades, su organización del trabajo, de su cultura y sus relaciones de poder sobre el espacio, es lo que transforma ese espacio de vivencia y producción (Rodríguez *et al.*, 2010:5).

En este sentido, el territorio es un aspecto clave de los procesos de reproducción social, marcados, en nuestras sociedades, por el imperativo de la acumulación de capital y sus procesos de expansión geográfica y de desposesión para la reproducción ampliada de las relaciones sociales capitalistas.

DISPUTAS TERRITORIALES EN EL SURESTE MEXICANO

El subcomandante insurgente Marcos, en el texto *Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía* (1994): explica la situación del estado de la siguiente manera:

Por miles de caminos se desangra Chiapas: por oleoductos y gasoductos, por tendidos eléctricos, por vagones de ferrocarril, por cuentas bancarias, por camiones y camionetas, por barcos y aviones, por veredas clandestinas, caminos de terracería, brechas y picadas; esta tierra sigue pagando su tributo a los imperios: petróleo, energía eléctrica, ganado, dinero, café, plátano, miel, maíz, cacao, tabaco, azúcar, soya, sorgo, melón, mamey, tamarindo y aguacate, y sangre chiapaneca fluye por los mil y un colmillos del saqueo clavados en la garganta del sureste mexicano. Materias primas, miles de millones de toneladas que fluyen a los puertos mexicanos, a las centrales ferroviarias, aéreas y camioneras, con caminos diversos: Estados Unidos, Canadá, Holanda, Alemania, Italia, Japón; pero con el mismo destino: el imperio. La cuota que impone el capitalismo al sureste de este país rezuma, como desde su nacimiento, sangre y lodo.

En ese sentido, el sureste mexicano es una región en la que se ha expresado el saqueo y la expropiación –desde las épocas de las monterías de los siglos XVII, XVIII y XIX– de las maderas preciosas y las plantaciones tropicales del naciente capitalismo en el sur de México.

El problema del capital en esta región mexicana, es que desde hace miles de años en sus territorios se encuentran poblaciones indígenas, las cuales se han apropiado el espacio y desde ahí manifiestan sus prácticas culturales, productivas, sociales y políticas. Con el modelo económico neoliberal y la necesidad del sistema capitalista de ocupar nuevas áreas para la producción de *commodities* con una creciente mercantilización de la vida, es que elementos naturales como el agua, el “aire”, la biodiversidad, los servicios ambientales de los “ecosistemas”, adquieren un papel estratégico en una creciente lucha geopolítica entre nuevos actores económicos en el sistema mundo actual.

En el texto *Movimientos socioambientales y resistencia campesina en México*, León Ávila (2011) plantea cinco grandes ejes en los cuales se teje la resistencia campesina e indígena a los intereses del capital en México:

- a) La resistencia en contra de la siembra de transgénicos en México.
- b) El movimiento de afectados por la presas y en defensa de los ríos.
- c) Movimientos contra la contaminación ambiental y la minería.
- d) La disputa por el patrimonio biocultural y sistemas de conocimiento indígenas.
- e) La disputa entre el sistema agroindustrial de producción y el sistema campesino indígena.

Describir de manera detallada cada uno de estos ejes rebasaría el objetivo del presente texto, en el tejido de puentes sur-sur y las diversas luchas de resistencia en América Latina, describiremos de forma breve los más recientes.

LA RESISTENCIA DE LOS APICULTORES DE YUCATÁN CONTRA LA SIEMBRA DE TRANSGÉNICOS EN MÉXICO

La introducción de cultivos transgénicos en México impacta de manera decidida en amplias regiones del país, en el 2005 se crea la ley de bioseguridad. Existen dos casos emblemáticos de movimientos socioambientales opuestos a su introducción: a) la defensa del maíz criollo, impulsada por organismos de la sociedad civil para impedir la siembra de maíz transgénico en zonas de desarrollo histórico del cultivo, y b) la experiencia de los apicultores mayas de Yucatán, opuestos al cultivo de la soya transgénica.

Los campesinos en la parte central del estado de Yucatán se dedicaban, como actividad principal, al cultivo de henequén; en el resto del territorio tenían la milpa como principal abastecedor de recursos para sus familias. Aunado a ello, la apicultura es una actividad que forma parte de la cultura maya en Yucatán, desde la época prehispánica se usan las abejas, primero con meliponas (abejas sin aguijón), incluso en el código Madrid se hace referencia al dios de las abejas *Ah mucen cab*, lo que ayudó a que posteriormente fuera bien adoptada la abeja europea *Apis mellifera*, que reeditaba más por la producción que se puede extraer. Hasta el presente, la apicultura es una actividad de gran importancia social y económica tanto en Yucatán como en el resto de la Península, ya que son los principales productores de miel en el país y de los más notables del mundo por su volumen de exportación. No obstante, esta actividad tiene serios problemas de supervivencia, ya que, por una parte, los ganaderos con la siembra de pastos de engorda sustituyen plantas trascendentales para la alimentación de las abejas como es el tajonal *Viguiera dentata*; y por otra, la introducción de la soya mecanizada cambió grandes extensiones de cultivo que antes eran ocupadas

por vegetación natural o policultivos, y hoy lo son por plantas transgénicas, lo cual repercute negativamente en la apicultura: se han encontrado trazas de polen contaminado, y debido a que la mayoría de la producción se exporta a Europa —donde algunos países condenan la introducción de alimentos modificados genéticamente—, no permiten la entrada de la miel. Además, el uso de pesticidas, si bien no matan a las abejas, pueden ahuyentarlas.

Por lo anterior, se ha documentado que existe una diversificación en el agro yucateco, basada principalmente en actividades arraigadas desde hace muchas generaciones; sin embargo, las constantes transformaciones en las políticas públicas —como la modificación del artículo 27 constitucional que facilita la compra-venta de tierras, o los cambios en los subsidios promovidos hacia el campo yucateco que puede incluir grandes cantidades de insumos agroquímicos— han propiciado el incremento de cultivos más redituables como la soya y el sorgo, que tienen fuertes impactos ambientales.

LA DISPUTA TERRITORIAL POR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

El sureste mexicano concentra más del 75% del agua dulce superficial disponible en el país, esto lo hace valioso desde el punto de vista geoestratégico. En ese sentido, los dos ríos más caudalosos, el Usumacinta y el Grijalva, en sus respectivas cuencas hidrográficas constituidas por ríos, arroyos y afluentes, permiten en un nuevo diseño geopolítico la construcción de diversas presas hidroeléctricas, con la finalidad de la interconexión con Centroamérica y América del Norte (Delgado, 2006).

La nueva ley agraria mexicana, reformulada en 1992 (López y Eslava, 2011), permite la compra-venta y renta de tierras ejidales y comunales; esto, aunado a un nuevo ciclo de acumulación capitalista basado en los elevados precios de algunos metales y en el desarrollo de nuevas tecnologías de explotación minera (Machado, 2011), favorecieron un auge de concesiones en nuestro país (Delgado, 2010).

Concordamos con Garibay Orozco (2010:137), quien señala que el territorio mexicano se encuentra dominado por paisajes de desposesión campesina:

[donde] la acumulación por desposesión apunta a la expansión por despojo sobre campos fronterizos a la matriz capitalista. Ya sobre ámbitos internos del capitalismo, como la privatización de tierras, servicios y bienes públicos del Estado, ya sobre ámbitos externos a él, como despojos legales o factuales de patrimonios de uso común de tribus, etnias, comunidades, cooperativas.

Para Anthony Bebbington (2013), catedrático y experto en el análisis del modelo de desarrollo extractivo, la diferencia fundamental entre el nuevo y el clásico extractivismo, es la posibilidad de mezclar recursos públicos en obras de infraestructura, en el cual el destino fundamental de las materias primas es la exportación.

En este punto es central la propuesta del Plan Mesoamérica que va unido a la iniciativa Mérida, no sólo se busca interconectar la electricidad, el gas, la energía, sino la creación de infraestructura carretera, vial, de comunicaciones que permita la penetración del capital trasnacional.

DESPOJO Y ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL SURESTE MEXICANO

En ese sentido, en el sureste mexicano se configura la propuesta de las zonas económicas especiales (ZEE) en Puerto Chiapas y en Frontera-Ciudad del Carmen, en Tabasco-Campeche los negocios de la infraestructura pública-privada contribuirán a un mayor saqueo hacia los pueblos del sureste mexicano; implicarán también ordenamientos territoriales de las comunidades campesinas cercanas a la costa de Chiapas, Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán; se contemplan claramente propiedades mixtas de la tierra para los impulsos agroindustriales, mineros, hidro-energéticos y de construcción de infraestructura que se visualizan en el sur-sureste, y que ubican a estas regiones dentro de la estrategia extractivista para saquear sus minerales, petróleo, agua y fuerza de trabajo.

Esto de acuerdo con lo que Harvey señala como las nuevas divisiones internacionales del trabajo territorial:

La organización de nuevas divisiones internacionales del trabajo [...] de nuevos complejos de recursos y de nuevas regiones como espacios dinámicos de acumulación de capital, proporciona nuevas oportunidades para generar beneficios y absorber excedentes de capital y mano de obra. Sin embargo, tales expansiones geográficas suelen amenazar los valores ya fijados en otros lugares. Esta contradicción es inevitable: o bien el capital se traslada y deja tras de sí un rastro de devastación y devaluación (por ejemplo, en Detroit) o permanece ahogándose en los excedentes que inevitablemente produce, sin encontrar oportunidades de inversión rentable para ellos (2014:154).

En ese sentido, es de esperarse que la puesta en marcha de las ZEE atraerá inversiones hacia la zona sur del país, en detrimento de los desarrollos que se encuentran en el norte, dando origen a un desarrollo geográfico desigual. Ahora bien, lo más importante

es visualizar que muchas de las áreas donde pretende implantarse la infraestructura que requiere la zona económica especial se encuentran en tierras cuya propiedad agraria es de campesinos, indígenas y pequeños productores. Por ello, es previsible que los conflictos agrarios y los movimientos socioambientales se generen con mayor intensidad en dichas regiones en los próximos años.

LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE CHIAPAS

Las ZEE fueron pensadas desde una visión economicista y colonial, por ello las comunidades campesinas e indígenas no han participado en su construcción y diseño. Con esto se viola el principio y derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta y a la información. Los alcances de la misma, los grupos empresariales involucrados y las infraestructuras a desarrollar se mantienen en secrecía por parte de la élite política y económica, con lo cual la transparencia está ausente de esta política institucional de gran calado.

En el ámbito federal se nombra una autoridad para las ZEE dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que es la encargada del cabildeo con los grupos económicos internacionales y nacionales sobre el destino de estos territorios nacionales. Como resultado de sus gestiones, sabemos que en los espacios donde actúan libremente los capitales internacionales, la ganancia del pueblo mexicano y chiapaneco será mínima, que el monto de inversiones que se desarrollarán en pocos años sobrepasarán los 100 mil millones de pesos, por lo cual el impacto en la vida de millones de personas será contundente.

Como parte del capital globalizado, los espacios de capital trasnacional que se construyen con estas ZEE no sólo generarán territorios libres de cargas aduaneras, fiscales, laborales y de gestión territorial diferenciada, sino que, sobre todo, son enclaves de las nuevas relaciones económicas mundializadas donde a México le corresponde insertarse a partir de estas empresas trasnacionales con materias primas, productos agrícolas y turismo, como se observa en Chiapas.

DE LA IDENTIDAD DE LA RESISTENCIA A LA IDENTIDAD PROYECTO. CANELONES DE LA SOBERANÍA EN URUGUAY

La perspectiva histórica y teórica muestra que el pensamiento agrario latinoamericano identifica en el campesinado la identidad de la resistencia, pero actualmente de formas

diversas se visualizan incipientes tránsitos hacia otros proyectos (Estado Plurinacional Bolivia, experiencias autónomas, etcétera). El caso uruguayo plantea una propuesta de diferencia en sentido histórico. La agricultura familiar, adaptación consensuada del campesinado latinoamericano, se ubica discursivamente en la identidad resistencia y agota ese discurso sin la consolidación de un proyecto.

Para reflexionar sobre la posibilidad del tránsito de la *identidad resistencia* a la *identidad proyecto* de la producción familiar en Uruguay, se propone dialogar con Castells desde la construcción del concepto “Canelones de la Soberanía”. En este concepto se fundarían las bases para proyectar una identidad proyecto que garantice y promueva soberanía de los territorios a partir de un modo de producción diferente. Particularmente las reflexiones tomarán como referencia el Departamento de Canelones (Uruguay), algo así como un irreductible territorio de la resistencia de la producción familiar ante la expansión y territorialización del capitalismo en su versión contemporánea del agronegocio.

Desde este lugar y concepto se propone problematizar los contenidos, dimensiones y procesos que a partir de una nueva política, como menciona Castells, permitan conectar valores y experiencias de habitantes en sentido político de soberanía. Este ensayo ideológico, sostenido desde identidad y cultura, se desarrolla intencionalmente en territorios y habitantes rurales, que mediados por la comunicación y los nuevos dispositivos tecnológicos son, ingenua e incrédulamente, la nueva *gente de la era de la información*.

EL PROCESO Y CONCEPTO DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR EN URUGUAY

Denominamos producción familiar al proceso de trabajo que involucra producción de distintos cultivos, cría de animales y/o elaboración de productos artesanales con destino al mercado y al consumo del grupo familiar. Se realiza fundamentalmente con base en el trabajo de la familia sin excluir un aporte menor de trabajo asalariado. Este proceso involucra el saber práctico referido a las características locales de producción cuya continua puesta en práctica crea una cierta cultura compartida y transmitida en los ámbitos familiar, comunitario y territorial (Bianco, Carámbula, Figueredo *et al.*, 2016).

Desde una mirada temporal e histórica, Oyhantçabal (2014) plantea que la discusión teórica sobre la especificidad del desarrollo del modo de producción capitalista en la agricultura está ligada directamente al avance y consolidación de la gran industria en el campo y, por ende, a la cuestión de la reproducción o diferenciación de las unidades de

producción no-capitalistas. Desde esta disyuntiva, se condujeron los mayores debates en torno a la resistencia, subordinación, exclusión del modo de producción campesina en un contexto de desarrollo de las relaciones capitalistas de producción (Carámbula, 2015:58).

Particularmente, una parte importante de los estudios sobre la resistencia han sido guiados por interrogantes del tipo ¿de qué forma resisten?, ¿por qué resisten? Las mismas han guiado a estudiosos, militantes, políticos, quienes desde la interrogación se plantean y ensayan una serie de respuestas mostrando las capacidades de resistir y/o adaptarse de este modo de producción particular: en este sentido, Piñeiro (1985) sostenía que “[...] aquellos que predijeron la destrucción del campesinado a medida que el capitalismo se desarrollaba en el campo, no tuvieron en cuenta dos modalidades por las cuales el campesinado, en los hechos, se está reproduciendo”. Estas dos modalidades por las cuales se reproducía el campesinado eran, según el autor: “[...] el rol del Estado y la burguesía en la preservación del campesinado” y, por otra parte, “la resistencia a la extracción de excedentes y la reproducción del campesinado”.

Como señala Carámbula (2015:59), Piñeiro identificaba que el Estado y la burguesía, tenían un papel o rol en la preservación del campesinado. La burguesía, desde su heterogeneidad, establecía diferentes relaciones con el campesinado. Algunas mediante la interlocución del Estado, otras a partir de formas de relación directa. Los conflictos entre la burguesía agraria y la burguesía industrial, en gran parte se vinculaban a los procesos de resistencia del campesinado y el papel que las burguesías ejercían. Estos conflictos formaban parte de los debates sobre el papel del Estado, asumiendo que la capacidad de control estatal forma parte de las estrategias de los diferentes sectores sociales, con el objetivo de controlar e imponer su lógica de acumulación.

Por otro lado, y en relación con las formas de resistencia que se planteaba el campesinado, Piñeiro (1985) identificaba dos: colectiva e individual. En las primeras el contenido colectivo de la acción es la categoría central, mientras que las formas de resistencia individual se ubicaban a nivel de la unidad doméstica. El autor recalca que si bien hay estrategias colectivas o individuales, las formas de resistencia son explicadas desde su oposición a la extracción de excedentes (Carámbula, 2015:59).

El otro debate que ha sido muy fecundo es sobre la definición de producción familiar. El mismo ha sido vasto, complejo, diverso, recogiendo diferentes interpretaciones, no sólo según el tiempo y lugar, sino sobre su función en el sistema, su sustento o no como clase social, finalmente complejizada cuando se intenta relacionarla o asimilarla a la definición de campesinado. Desde definiciones como clase pre-capitalista, fusiones en su proceso histórico definiendo al campesindio (Bartra, 2011), los *farmers* en Estados Unidos y varias definiciones más sin contar la ausencia en nuestra

perspectiva occidental de las formas más variadas e históricas de producción familiar y campesina en Asia o África.

CANELONES, URUGUAY, TERRITORIO DE LA PRODUCCIÓN FAMILIAR¹

EL TERRITORIO COMO IDENTIDAD

El territorio, es la construcción sociohistórica moldeada por la relación entre los seres humanos y su entorno productivo, social y natural; en su realización coexisten el plano material e inmaterial de un proceso dialéctico de elaboración de un concepto.

Canelones es un departamento que posee una identidad propia desde los comienzos mismos de la colonización española, erigiéndose en 1764 el poblado de Santa Lucía como frontera a fin de detener el avance portugués en territorios de la corona española. En la actualidad, Canelones es el segundo más poblado del país (luego de Montevideo); el censo de 2011 indica que alberga a 520 187 personas, 16% de la población total del Uruguay que ha llegado a los escasos 3 286 314 habitantes. Según la misma fuente, la población rural del departamento es de 48 219 habitantes.

LUGAR PARA PRODUCIR

Hacia fines del siglo XIX los pobladores canarios conformarán la “despensa” de la ciudad-puerto y sus alrededores. En los dos primeros tercios del siglo XX en el departamento se desarrolló un modo de producción agrícola intensiva en vastos rubros (cereales, horti-fruticultura, vitivinicultura, etcétera) generando un modelo peculiar de producir y dando nacimiento a un sector social del agro uruguayo, el productor familiar. Tan generalizada estaba esta forma de producción que mientras que en Canelones, un departamento de 4 534 km², en 1966 había 16 276 predios –lo que daba un promedio de 28 hectáreas por predio–, en departamentos de ganadería extensiva como Tacuarembó, con 15 969 km², había 3 765 predios –lo que arrojaba un promedio de 424 hectáreas por predio–, o si se lo compara con Artigas en el mismo año, este departamento de 12 144.5 km² tenía 2 056 predios agropecuarios –con un promedio de 591 hectáreas por predio.

¹ El apartado toma como referencia el documento de Carámbula *et al.* (2015).

Esta realidad ha cambiado, y la producción familiar ha decrecido drásticamente en las últimas décadas, de la mano de reconfiguraciones productivas en el país. El Censo General Agropecuario (DIEA, 2011) indica que la cantidad de explotaciones agropecuarias del departamento asciende a 7 790 (44 781 explotaciones del país). La misma fuente muestra que Canelones, con sus 336 805 hectáreas es, después de Montevideo, el segundo departamento con menor superficie agropecuaria del país (2% de la superficie agropecuaria nacional). Esta característica es uno de los aspectos distintivos de Canelones, la distribución de la tierra en explotaciones cuya superficie promedio es sustantivamente menor que el promedio nacional.

Finalmente y de acuerdo con la declaración jurada de Productores Familiares del MGAP-DGDR, para junio de 2016 la cantidad de registros para el departamento es de 4 967 productores familiares (aproximadamente 25% del total del país), de los cuales, 86% corresponde a predios menores a 50 hectáreas. Siendo de 129 392 hectáreas la superficie utilizada por los productores familiares registrados. Según el propio registro, la horticultura es declarada como el rubro principal en cuanto generador del ingreso familiar (2 154 registros) seguido por la ganadería (1 239 registros). Además, esta última ocupa el primer lugar como rubro secundario (674 explotaciones). También las producciones animales como lechería, aves y cerdos constituyen en conjunto importante de unidades de producción.

DE LA IDENTIDAD DE LA RESISTENCIA A LA IDENTIDAD PROYECTO. CANELONES DE LA SOBERANÍA

El concepto *Canelones de la Soberanía*, sugiere e implica un proceso de construcción simbólica, con intencionalidad ideológica y como engranaje de un proyecto político; un significado que justifique su razón de ser y la razón que enmarque la política pública. El posicionamiento de un territorio, con su historia, su identidad y su cultura depende de los habitantes de un lugar, de su organización, de su interpelación al Estado. Como se mencionó en apartados anteriores la agricultura familiar en Canelones es un sector clave en términos de soberanía, ciudadanía e identidad.

Las características contemporáneas de los territorios rurales se moldean a influjos del capital, del agronegocio, generando profundos cambios económicos, sociales, culturales y ambientales que adquieren especial significación en cada territorio, ya que se enlazan con la historia particular de cada región.

Como señala Carámbula *et al.* (2015) en Canelones, por un lado la actividad agropecuaria característica se ha visto sometida a diversas presiones que la indujeron e

inducen a profundas reconfiguraciones en el uso de los territorios y de las actividades de sus habitantes. Por otro, diversos territorios rurales y costeros han sido “redescubiertos” por parte de algunos residentes ciudadanos del espacio metropolitano como lugares que reúnen características que los hacen atractivos para vivir.

En esa tensión sobre la estructura agraria que generan las nuevas formas del capital agrario y los nuevos habitantes del campo, la resistencia emerge en múltiples formas. En los medios y programas de comunicación locales, en las organizaciones de productores, en las escuelas y centros educativos, en el pueblo y su órganos de gobierno local. La resistencia es identidad histórica, a veces un tanto conservadora, cuestionadora del Estado, su intervención y su ausencia, pero ciertamente no madura en proyecto que dirija esa resistencia.

La materialización de las ideas, en sentido de identidad proyecto, construye el *Canelones de la Soberanía* como concepto y proceso. Señal de identidad y posicionamiento de un modelo de desarrollo que reconozca y resigne la especificidad de los habitantes, su modo de producción y su cultura. También es un concepto cuestionador del modelo predominante, caracterizado por la concentración y la exclusión de modos de producción y habitantes, concentrador de la tierra y la riqueza.

En síntesis, Canelones de la Soberanía reconoce, en los territorios de la producción familiar, un campo de resistencia en el que la disputa de la política –desde la soberanía, el trabajo, la cultura, la riqueza y el derecho– se transforma en proyecto.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL EN BRASIL: ENTRE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES

En el transcurso de la primera década del siglo XXI, la llegada de Luiz Inacio Lula da Silva –como principal símbolo del Partido de los Trabajadores (PT)– a la presidencia de la República de Brasil fue permeada por un conjunto de expectativas de sectores de izquierda y fracciones de clases constitutivas de la clase trabajadora.

Desde el punto de vista económico y social eran visibles los efectos de las reformas neoliberales puestas en marcha en la década de 1990. En ese contexto, se apostó por un pacto forjado por el PT con sectores político-económico-financieros representantes del capital (cuyo vicepresidente, José Alencar, era el principal representante) y con el sector del trabajo capitaneado por la Central Única de los Trabajadores (CUT) y con otros sectores de la sociedad organizada (como por ejemplo el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra –MST).

El retorno del papel activo del Estado fue amparado en la constitución de un frente amplio de políticas públicas con diversos enfoques que buscaban contemplar la multidimensionalidad del desarrollo. En el ámbito rural, políticas previamente existentes fueron reestructuradas, dando paso a otras que fueron criadas con el objetivo de fortalecer la agricultura familiar.²

Grisa y Schneider (2015) consideran que las políticas públicas de desarrollo de la agricultura familiar pueden ser evaluadas por medio de las relaciones entre el Estado y la sociedad a partir de tres referentes tempo-espaciales: 1) agrícola y agrario; 2) social y asistencial; y 3) referente sobre la construcción de mercados para la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental.

El referente agrícola y agrario a partir de 1994 tuvo como principal aspecto el reconocimiento de la relevancia de la agricultura familiar como productora de alimentos y generadora de empleo y renta y, por tanto, la legitimidad de creación de Asentamientos de Reforma Agraria como la creación del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf) en 1996. El segundo referente social y asistencial, tuvo como marco la creación del Pronaf, Infraestructura y Servicios Municipales en 1997, con el objetivo de proporcionar el acceso a insumos modernos en la producción agropecuaria, bien con la creación de un conjunto de programas asistenciales como la Bolsa Escuela, la Bolsa Alimentación y Vale Gas que posteriormente serían unidos con la creación del Programa Bolsa Familiar. El tercer referente tiene como centralidad la creación del Programa Hambre Cero que se articuló a partir de diversos programas de incentivo a la producción y la comercialización agrícola, además de la mejora de la calidad de vida en el campo con el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Habitación Rural (PNHR) (Grisa y Schneider, 2015).

A partir de este arreglo institucional de las políticas públicas para la agricultura campesina, se dio prioridad al último punto de referencia de las políticas públicas, teniendo en cuenta la centralidad de la seguridad alimentaria y nutricional para combatir el hambre y la vulnerabilidad social y, más que esto, la relevancia para plantear la cuestión de la soberanía alimentaria como un paradigma inherente al proyecto

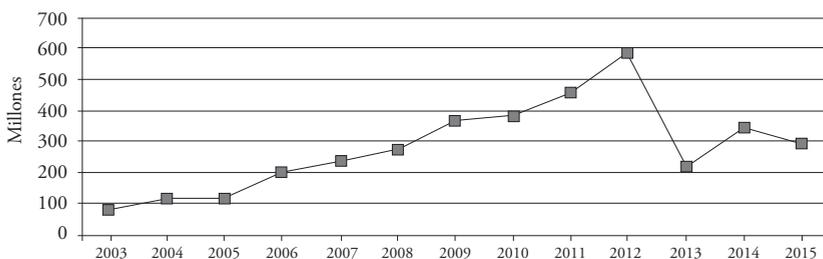
² Desde el punto de vista conceptual, oficialmente el Estado brasileño adoptó para efecto de las políticas públicas, la noción de agricultura familiar en lugar del concepto de agricultura campesina, ampliamente utilizado por los movimientos sociales y una parte significativa de los investigadores. La noción "agricultura familiar" que es utilizada oficialmente desde la creación del Pronaf (1996) fue legalmente instituida por la ley 11.326 de 24/07/2006, la Ley de la Agricultura Familiar.

urgente de la soberanía popular mediante la cual la cuestión de la tierra debe ser considerada en Brasil. Por lo tanto, vamos a analizar dos programas de desarrollo rural anclados en la formación de los mercados institucionales para la comercialización de la producción campesina: el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Producción y Uso de biodiésel (PNPB).

El PAA se estableció a partir de la Ley 10.696/2003, por medio del diagnóstico de la existencia de la inseguridad alimentaria en los hogares. Según la Encuesta Nacional por domicilio (PNAD), divulgada por el IBGE en 2004, 34.9% de los hogares se encontraba en una comida ligera inseguro, moderada o grave, que asciende a 18 millones de hogares. Por lo que el PAA se formuló para mitigar este problema, lo que representa una acción estratégica del Programa Hambre Cero, a partir de potenciar la producción de la agricultura familiar para satisfacer la demanda de distribución de alimentos en el país.

Desde el punto de vista presupuestario, hubo una evolución sistemática del 2003 (83 millones de reales) al 2012 (586 millones de reales), como puede verse en la Gráfica 1. En el periodo 2013-2015 hubo fluctuaciones en la asignación del presupuesto en particular con la disminución en el volumen de los recursos asignados. Según el Informe Anual de la Conab, la reducción de 2015 se debe “a las características de cada región en términos de organización social local y el acceso a la información de los proveedores beneficiarios o sus representantes legales” (Conab, 2016:6).

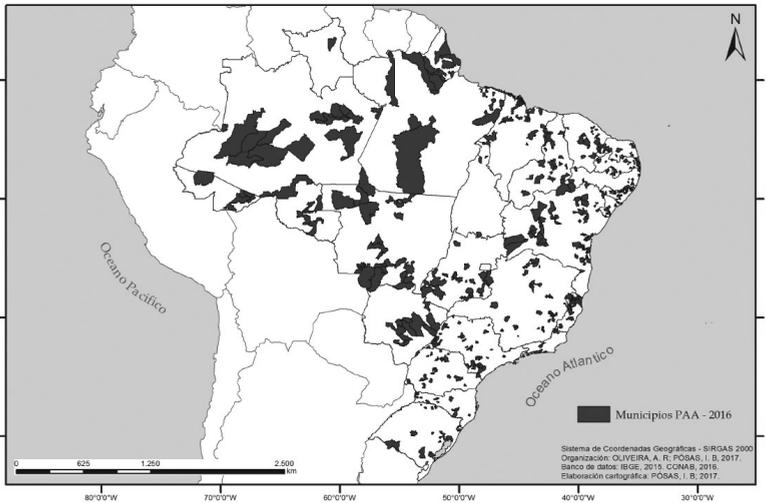
GRÁFICA 1
Evolución presupuestal del Programa de Adquisición de Alimentos (2003-2015) (R\$)



En cuanto a la extensión espacial de la PAA, el Mapa 1 permite la visualización de los municipios que se adjudicaron en 2016, un total de 476, lo que corresponde al 8.54% de 5 570 municipios existentes en el país. Esto demuestra que a pesar del crecimiento gradual de la asignación del presupuesto a partir de las municipalidades atendidas, el

programa sigue siendo muy pequeño; teniendo en cuenta todos los municipios, así como el número de agricultores que fueron apoyados, muestran las mismas cantidades de 2015, 38 794 para un total de 4.3 millones establecimientos de la agricultura familiar, de acuerdo con los datos del censo agropecuario del IBGE de 2006, menos del 1% de las explotaciones que son operadas por la agricultura campesina en Brasil fueron apoyadas con el PAA en el periodo analizado.

MAPA 1
Municipios cubiertos por el Programa de Adquisición de Alimentos en 2016



Fuente: Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab, 2016).

El PNPB comenzó en diciembre de 2003, con la formación de una Comisión Ejecutiva Institucional (IEC) y un Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) a partir de un decreto de la Presidencia. El GTI investigó y analizó la viabilidad de la producción y el uso de este combustible en Brasil, también se realizaron algunos estudios e iniciativas para el desarrollo de proyectos que incluyen diferentes aspectos, entre éstos: el estudio de las oportunidades de diésel y de inserción en el mercado de biodiésel; la definición de la logística de distribución; el rendimiento del motor con la adición de 2% de

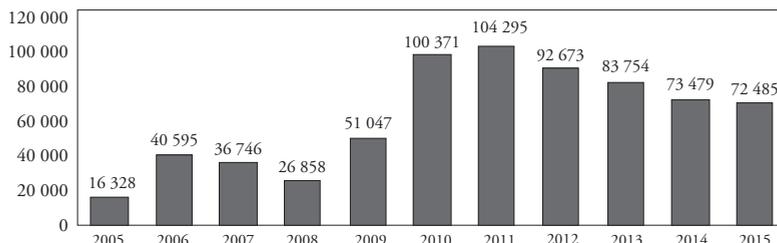
biodiésel con diésel; y el estudio de localización de biodiesel, producción de postes para la siembra, la trituration, la producción y la distribución (Brasil, 2004). Por otro lado, también se establecieron principios del programa de reglamentación, dando prioridad a los siguientes puntos: “1) la política de inclusión social; 2) el uso de aceite de acuerdo con la diversidad regional; 3) la seguridad del suministro para el nuevo combustible; 4) la garantía de calidad para el consumidor; 5) buscar la competitividad frente al diésel de petróleo” (Brasil, 2004:12).

Como resultado de este estudio, el PNPB se puso en marcha en diciembre de 2004 con el lema “El biodiésel. El nuevo combustible en Brasil”, para representar una prioridad y la acción estratégica en el país en el que se presenta como una fuente alternativa de energía, siendo coordinado por el Ministerio de Minas y Energía e integrado por organismos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), la Agencia Nacional de Petróleo (ANP), Petrobras y Embrapa (Brasil, 2011). Con el reglamento del programa para su funcionamiento fue creada la figura del productor de biodiésel y el concepto de combustible social, ya que la propuesta presentada por el PNPB era producir el combustible de un vínculo entre el productor de biodiésel y la agricultura familiar mediante el Sello Combustible Social (SCS), mismo que se creó para reconocer las industrias de biodiésel que adquieren un porcentaje de materia prima de la agricultura familiar, operando la estrategia social del PNPB, considerando que consiste en la identificación del “[...] productor de biodiésel que cumple los criterios establecidos por el Programa y que confiere estatus de promotor de inclusión social de los agricultores familiares encuadrados en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf)” (Brasil, 2011:8).

Desde el punto de vista del alcance del PNPB en cuanto al número de familias, se observa que se duplicó el número de las atendidas por el PAA, considerando que en 2015 se totalizaron 72 485, lo que equivale al 1.6% del total de los establecimientos agropecuarios explotados por la agricultura campesina.

En cuanto a las materias primas utilizadas para la producción de biodiésel, hay un alto nivel de concentración de la utilización del aceite de soja, lo que contradice los supuestos relacionados con la diversidad productiva de la agricultura campesina. En el periodo de muestra en el Cuadro 1, hay una utilización de la soja del 70% de la cantidad de materias primas. Es importante tener en cuenta que el cultivo de soja en Brasil que se caracteriza históricamente por la alta tecnología y la agricultura desarrollada por los no agricultores que conforman la agroindustria, que ha centrado su producción a la exportación de *commodities* agrícolas.

GRÁFICA 2
Evolución del número de familias contempladas por el PNPB de 2005 a 2015



Fuente: SAF/MDA (2011). Org.: Ángela Maria Martins Peixoto, 2016.

CUADRO I
Porcentaje de materias primas utilizadas en la producción de biodiésel (febrero de 2010 a 2016)

Materia-Prima/ Periodo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aceite de soja	77.13	82.93	74.54	67.09	70.87	74.72	72.24
Grasa bovina	17.07	13.60	15.63	21.92	24.78	23.03	20.13
Aceite de algodón	4.62	2.02	7.72	4.63	1.89	0.63	2.81
Otros materiales grasos	0.28	0.86	0.97	2.75	0.72	0.33	2.62
Grasa de pollo	0.01	0.03	0.04	0.10	0.02	0.06	0.03
Grasa de puerco	-	0.27	0.33	1.10	0.75	0.56	0.95
Aceite de fritura usado	0.16	0.26	0.52	1.03	0.81	0.67	0.76
Aceite de girasol	0.02	0.01	-	-	-	-	-
Aceite de Palma	0.60	-	0.25	1.39	0.17	-	0.48

Fuente: Boletín mensual, Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
 Org.: Ángela Maria Martins Peixoto.

Además de la concentración socioeconómica de la producción de soja en el agrogocio, los campesinos se ven sometidos a la lógica productiva organizacional del capital industrial que es capaz de realizar el procesamiento industrial de soja para la comercialización junto con la Agencia Nacional del Petróleo (ANP). Esas industrias procesadoras, al adquirir los productos de la agricultura campesina, se benefician del SCS con la diferenciación/exención tributaria, participación asegurada del

80% de biodiésel negociado en las subastas de ANP, mejoras en las condiciones de financiamiento junto al sistema financiero y posibilidad de promover su imagen junto al mercado por “valorizar” la producción campesina, conforme afirma Peixoto (2016:120).

En la comparación de la eficacia de la PAA y PNPB y su correlación con la seguridad alimentaria y la soberanía, se ven claramente avances en el primer programa, a pesar de lo limitado de su alcance; mientras que el segundo programa simplemente permite que las actividades del agronegocio y del sector industrial, en detrimento de la agricultura, históricamente guíen la pauta del proceso de desarrollo del campo brasileño.

La conversión de la agricultura de alimentos en productora de agrocombustibles puede traer serios riesgos a la seguridad alimentaria, y sobre todo inviabiliza cualquier proyecto de cambio estructural de la cuestión agraria brasileña, como impulsora de la soberanía alimentaria. Oliveira (2011) apunta que desde la década de 1990, Brasil mantiene inalterada el área productiva de los tres alimentos que hacen parte de la dieta básica del país: arroz, frijol y mandioca; y señala que el camino para una política alimentaria necesita esencialmente de una reforma agraria amplia y masiva.

REFLEXIÓN FINAL

La dinámica reestructuradora del capital en América Latina es una continuación del proceso de dominación colonial, ya que la penetración de relaciones sociales y las nuevas divisiones territoriales del trabajo, implican básicamente una confrontación violenta con las comunidades campesinas e indígenas que mantienen otra forma de relacionarse, de construir su economía y sus sentidos de vida.

El funcionamiento del capitalismo en la actualidad hace necesario por tanto este proceso de expansión y de geocolonialidad para que las grandes empresas transnacionales puedan, por una parte, relocalizar muchas de sus inversiones para hacer frente a sus problemas de rentabilidad, a partir de una extracción de plusvalor sin precedentes –súper explotación del trabajo, le llama Ruy Mauro Marini (1994)– y, por otra, llegar a nuevos mercados de consumo que les permitan maximizar sus ganancias.

En ese sentido, a todos estos procesos de dominio de las territorialidades los denominaremos el nuevo proceso geo-colonial sobre los patrimonios bioculturales fundamentales de América, ya que no solamente se trata de aprovechar los recursos naturales espaciales de esos territorios sino también de construir nuevas pautas de comportamientos socioculturales y de reeducación en dichas zonas.

BIBLIOGRAFÍA

- Ávila, Agustín (2013). *Turismo y pueblos indígenas en México: despojo y veredas de apropiación comunitaria en Patrimonio Biocultural, territorio y sociedades afroindioamericanas en movimiento*. Buenos Aires: Clacso.
- y León Ávila (2016). “Desposesión, metabolismo social y territorio: resistencias y re-existencias en Chiapas”, *Pacarina del Sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano*, octubre-diciembre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
- y José Sulvaran (2014). Impactos socioambientales del cultivo de la palma africana (elaeis guineensis) en el ejido Boca de Chajul, Chiapas, México”, *Revista Iberoamericana de Ciencias*, vol. 1, núm. 7, diciembre, Texas, Estados Unidos.
- Ávila, León (2011). “Movimientos socioambientales y resistencia campesina en México”, en *Movimientos y conflictos sociales en el México contemporáneo (1943-2011)*. México: Editorial Uníos.
- Bartra, Armando (2011), *Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado*. Quito, Ecuador: Ediciones La Tierra/Oxfam.
- Bebbington, A. (2013). *Natural resource extraction and the possibilities of inclusive development: politics across space and time*. Available at SSRN 2386711 [<http://www.ssrn.com/en/>], fecha de consulta: 20 de febrero de 2014.
- Bianco, Mariela, Matías Carámbula y Soledad Figueredo (2016). “Presentación”, mimeo. Uruguay.
- Brasil. Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos (2010). *Balanzo de avaliação da execução do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 2003 a 2010. Relatório descritivo* [http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/paa/visi_paa_geral/documentos/BALANCO%20DE%20AVALIACAO%20GRUPO%20GESTOR%20DO%20PAA%20versao%2024-02-11.pdf], fecha de consulta: 27 de octubre de 2014.
- Carambula, Matías (2015). “Territorialización de la Cadena Global de Valor Forestal en Uruguay. Claves metamórficas para la comprensión del problema agrario”. Tesis para optar al título de doctor en estudios sociales agrarios. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.
- *et al.* (2015). “Gobierno de Canelones. Proyecto presupuestal Agencia de Desarrollo Rural”. Canelones. Mimeo.
- (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza Editorial.
- (2009). *La era de la comunicación. Economía, sociedad y cultura*, vol. III. Fin del Milenio. México: Siglo XXI Editores.
- Composto y Navarro (2014). Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina. Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, pp. 33-74.

- Conab (2016). *Levantamientos de Safra. 2016-2017*. Brasil: Companhia Nacional de Abastecimiento.
- Delgado-Ramos Gian Carlo (2006). *Agua. Usos y abusos. La hidroelectricidad en Mesoamérica*. México: CEIICH-UNAM.
- (2010). “América Latina y el caribe como reservas estratégicas de minerales”, en Delgado, Gian Carlo, *Ecología política de la minería en América Latina*. México: CEIICH-UNAM, pp. 17-57.
- Delgado Wise, Raúl y Rubén Del Pozo Mendoza (2001). “Minería, Estado y gran capital en México”, *Economía e Sociedade*, núm. 16, junio, Campinas, pp. 105-127.
- Espluga, J., J. Farré, J. Gonzalo y A. Capdevila (2007). “Conflictos socioambientales latentes: percepciones y vivencias sociales de los riesgos petroquímicos en Tarragona”, *IX Congreso de la Federación Española de Sociología*.
- Garibay Orozco, Claudio (2010). “Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual”, en Delgado Ramos, Gian Carlo, *Ecología política de la minería en América Latina*. México: CEIICH-UNAM, pp. 133-182.
- Grisa, Catia y Sergio Schneider (orgs.) (2015), *Políticas públicas de desenvolvimiento rural no Brasil*. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
- Gudynas, Eduardo (2009). “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contexto y demandas bajo el progresismo actual”, en Jürgen Schuldt *et al.*, *Extractivismo, política y sociedad*. Quito, Ecuador: CAAP/CLAES.
- Harvey, David (2014). *17 contradicciones y el fin del capitalismo*. Quito, Ecuador: Ed. IAEN.
- (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Ediciones Akal.
- (2004). “El ‘nuevo’ imperialismo: acumulación por desposesión”, *Socialist Register*.
- Lefebvre, Henri (2013). *La producción del espacio*. Madrid España: Capitán Swing Libros.
- (1991). *The production of space* (vol. 142). Oxford: Blackwell.
- Lezama, José Luis (2004). *La construcción social y política del medio ambiente*. México: El Colegio de México.
- López Barcenas, Franciso y Mayra Monstserrat Eslava Galicia (2011). *El mineral o la vida. La legislación minera en México*. México: Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas/ Red-IIPIM/Ed. Pez en el árbol.
- Manzano Fernández, Bernardo (2008). “Cuestión agraria: conflictualidad y desarrollo territorial”. Mimeo
- Maneja, R., M. Boada, N. Barrera-Bassols y M.K. McCall (2007). “Interpretación de las percepciones socioambientales infantiles y adolescentes: propuestas de implementación a escala local y regional, La Huacana, Michoacán, México”, en *Quinto Congreso Europeo de Latioamericanistas, Las relaciones triangulares entre Europa y las Américas en el siglo XXI: expectativas y desafío*. Bruselas.
- Machado Aráoz, Horacio (2011). “El auge de la minería trasnacional en América Latina. De la ecología política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo”, en Héctor Alimonda, *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones CICCUS/Clacso, pp. 135-180.

- Oliveira, Arioaldo Umbelino de (2011). “Os agrocombustíveis e os dilemas da agricultura camponesa e familiar”, en Júlia Adão Bernardes y Luís Angelo dos Santos Aracri (orgs.), *Novas fronteiras do biodiesel na Amazônia: limites e desafios da incorporação da pequena produção agrícola*. Río de Janeiro: Arquimedes.
- Ortiz, Pablo (2011). “Capitalismo extractivo, minería y derechos ¿pueden cohabitar?”, *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, núm. 39, enero, vol. 15, Issue 1, Quito, Ecuador.
- Oyhantçabal, Gabriel (2014). “¿Yo sé quién soy? Contradicciones en el pasaje de asalariado a colono. El caso de los trabajadores de la UTAA en la colonia Raúl Sendic Antonaccio”. Tesis para obtener el título de maestro en ciencias agrarias, opción ciencias sociales. Montevideo: Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
- Peixoto, A.M.M. (2016). “As políticas públicas de desenvolvimento rural em Goiás: os efeitos do PAA e do PNPB para a agricultura camponesa”. Tesis para obtener el título de maestro en geografía. Goiânia: UFG/PPGeo.
- Piñeiro, Diego (1985). *Formas de resistencia de la agricultura familiar. El caso del Noreste de Canelones*. Montevideo: Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay/Ediciones de la Banda Oriental, Colección Estudios sobre la Sociedad Uruguaya núm. 6.
- PNUD (2004). *Informe sobre el desarrollo humano 2004. La libertad cultural en el mundo diverso de hoy*. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Porto-Gonçalves, C.W. (2001). *Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. México: Siglo XXI Editores.
- Roblero, Marín (2012). “El despertar de la serpiente, la sierra madre de chiapas en riesgo: comunidades étnicas en resistencia ante la extracción minera en Chicomuselo, Chiapas”. Tesis de maestría en desarrollo rural regional, Universidad Autónoma Chapingo.
- Rodríguez W., Carlos (2015). *Geopolítica del desarrollo local. Campesinos, empresas y gobiernos en la disputa por territorios y bienes naturales en el México rural*. México: UAM/Ítaca.
- Rodríguez, Carlos, Mindahi Bastida, Sergio Grajales, Marco Lima, Alejandra Meza, Víctor Moreno y Mayra Nieves (2010). “Escudriñar los enfoques teóricos sobre el territorio”, en Carlos Rodríguez (coord.), *Defensa comunitaria del territorio en la zona central de México. Enfoques teóricos y análisis de experiencias*. México: Juan Pablos Editor.
- Rosset, Peter (2004). *Soberanía alimentaria: reclamo mundial del movimiento campesino* (traducción: Adriana Latrónico y María Elena Martínez). Institute for Food and Development Policy Backgrounder, vol. 9, núm. 4, Fall 2003.
- Rubio, Blanca (2014). *El dominio del hambre: crisis de hegemonía y alimentos*. México: Juan Pablos editor/UACH/COLPOS Puebla/UAZ.
- Santos, Milton (1990). *Por una geografía nueva*. Madrid, España: Ed. Espasa-Calpe.
- Subcomandante Insurgente Marcos (1994). “Chiapas, el sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía”. Tomado de ensayos y comunicados [www.ezln.org].
- Svampa, Maristella (2012). “Consenso de los *commodities*, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina”, *Revista Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, “Movimientos socioambientales en América Latina”, año XIII, num. 32, noviembre, Argentina: Clacso.



IMPACTO SOCIOAMBIENTAL DE LAS MINAS

El impacto ambiental de las minas a lo largo y ancho del territorio nacional es motivo de vergüenza para las instituciones ambientales; pero si además se añade el impacto social que la minería genera, la vergüenza se convierte en indignación y en explicación de lo que en cualquier momento puede suceder en estas regiones donde el saqueo, la devastación y la expropiación de territorios genera un conflicto hasta ahora acallado por múltiples vías, pero que detonará combates perfectamente justificados.